

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



Medellín, catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario identificado con el radicado número 05266 31 05 001 2016 00643 01 promovido por el **CONSORCIO DE REMANENTES DE TELECOM**, integrado por **FIDUAGRARIA S.A.** y **FIDUCIAR S.A.**, quien a su vez actúa como vocero y administrador del **PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACION**, contra el señor **GUSTAVO DE JESÚS GARCÍA RENDÓN**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante frente a la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de

la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **359**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El CONSORCIO DE REMANENTES DE TELECOM, integrado por FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A., quien a su vez actúa como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACION pretende en este juicio el reintegro de la suma de \$150.444.660 por concepto de mesadas de pensión anticipada que el señor Gustavo de Jesús García Rendón recibió con ocasión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, confirmado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, revocado por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-377 de 2014, indexación y costas del proceso.

Como fundamento de las pretensiones se expuso que el señor Gustavo de Jesús García Rendón, laboró al servicio de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM desde el 4 de junio de 1985 hasta el 31 de enero de 2006. En marzo de 2003 la empleadora les ofreció un plan de pensión anticipada a los trabajadores oficiales cobijados por alguno de los regímenes especiales de pensión y que les faltaran siete años o menos para el cumplimiento de requisitos al 31 de marzo de 2003. El demandado con pleno conocimiento de no cumplir con los requisitos para acceder a tal pensión

anticipada instauró acción de tutela invocando la inclusión en el plan de pensión anticipada. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero mediante sentencia de 2 de septiembre de 2009 ordenó al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM, incluir al señor Gustavo de Jesús García Rendón en el plan de pensión anticipada, así como el reconocimiento y pago de las mesadas dejadas de percibir desde el momento de la desvinculación, debidamente indexadas. Dicha providencia fue confirmada el 24 de septiembre de 2009 por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica. El PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM dio cumplimiento al fallo de tutela y canceló la suma de \$150.444.660. La Corte Constitucional por medio de sentencia T-377 de 12 de junio de 2014, revocó las decisiones emitidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, sin que, a la fecha el demandado haya procedido con el reintegro de los dineros.

El señor Gustavo de Jesús García Rendón en el escrito de réplica indicó que según acta 1782 de 28 de febrero de 2003 de la junta directiva de Telecom, la empresa ofreció a sus trabajadores un plan de pensión anticipada dirigida a aquellos trabajadores vinculados a Telecom con anterioridad al 29 de diciembre de 1992, fecha en la cual se transformó a Telecom en Empresa Industrial y Comercial de Estado, y que tenían una expectativa legítima de pensión; esto es, que les faltaren menos de 7 años para consolidar el derecho a su pensión de jubilación en cualquiera de las 3 modalidades de pensión aplicable a los trabajadores de TELECOM vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1992: 1) 20 años de servicio al Estado y 50 años de edad, sin distinción de sexo, 2) 25 años de servicio al Estado y cualquier edad, sin distinción de sexo, y 3) 20 años de servicio en cargos de excepción en el sector de las comunicaciones y cualquier edad. Sin exigir el

requisito de estar cubierto por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Señala que por concepto de retroactivo ordenado en la sentencia de tutela solo recibió la suma de \$67.454.267. Y que no ha efectuado reintegro de suma alguna pues no está en la obligación de hacerlo, ni ha sido requerido en mora. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Y formuló las excepciones de Prescripción, Pago de lo no debido e Inexistencia del derecho reclamado.

En sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín condenó al señor Gustavo de Jesús García Rendón a reintegrar en favor del CONSORCIO DE REMANENTES DE TELECOM, integrado por FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A., quien a su vez actúa como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN la suma de \$150.444.660 por concepto de mesadas de pensión anticipada de vejez, ordenada mediante sentencias judiciales de tutela, revocadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, indexación y costas del proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado del demandante inconforme con la sentencia de primera instancia, precisó. Primero, que tal decisión vulnera lo establecido en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el precedente judicial en términos de prescripción. Segundo, que a su vez se contrarían los derechos adquiridos, el debido proceso y acceso a la administración de justicia, y los postulados de confianza legítima y de la buena fe, la cual se presume, por lo que es a la entidad demandante a quien le corresponde desvirtuar la misma. Tercero, que la Corte Constitucional en la sentencia T-214 de

2018 refiere a la improcedencia del reintegro de tales dineros y establece los parámetros para la devolución de los mismos. Cuarto, que no existe prueba respecto de que su representado haya recibido la suma de \$150.444.660, pues ni siquiera fue allegado el título judicial mediante el cual se pagó lo ordenado en el fallo de tutela.

Frente al recurso promovido por el apoderado del demandante, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con los Artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada del CONSORCIO DE REMANENTES DE TELECOM, integrado por FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A., quien a su vez actúa como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACION solicita se confirme la decisión absolutoria de primera instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia consiste en establecer si es procedente que el señor Gustavo de Jesús García Rendón reintegre en favor del CONSORCIO DE REMANENTES DE TELECOM, integrado por FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A., quien a su vez actúa como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN la suma de \$150.444.660 por concepto de mesadas de pensión anticipada que recibió con

ocasión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, confirmado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, revocado por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-377 de 2014, debidamente indexada.

Como problema jurídico asociado la Sala determinará si en este caso ha operado el fenómeno de la prescripción.

CONSIDERACIONES

En virtud del principio de la carga de la prueba o auto responsabilidad, consagrado en el artículo 164 y 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión normativa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Las partes están obligadas a probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que consagran el derecho que reclaman, manteniendo la obligación de aportar los soportes en que se basan sus afirmaciones, con las cuales pretenden se les reconozca un derecho, la aplicación de una norma, o un efecto jurídico particular, el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de éstos.

En desarrollo de tales preceptos normativos, la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25 de octubre de 2011, radicado 37547 sostuvo:

“...La Sala considera que el Tribunal no distorsionó el verdadero sentido de la regla de juicio de la carga de la prueba, contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil –aplicable al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, merced a lo dispuesto en el artículo 145 del estatuto de la materia-, porque la carga de la prueba del tiempo servido por el trabajador al empleador la soporta el primero, de modo que la falta de demostración del tiempo de servicios comporta que no hay posibilidad para condenar al pago de prestaciones, salarios e indemnizaciones...”.

La prueba documental que milita en el expediente da cuenta:

1. Que dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Gustavo de Jesús García Rendón contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACION PAR, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba mediante sentencia de 2 de septiembre de 2009 tuteló los derechos fundamentales invocados por el tutelante y ordenó al accionado, incluirlo en el plan de pensión anticipada y pagarle las mesadas dejadas de percibir desde el momento de la desvinculación, debidamente indexadas.
2. Que dicha providencia fue confirmada el 24 de septiembre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica – Córdoba.
3. Que dentro de la liquidación individual presentada por la apoderada del señor Gustavo de Jesús García Rendón y otros accionantes, misma que fue aprobada por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba para efectos de la entrega del dinero embargado, se calculó un total de \$8.252.883.637, monto respecto del cual se liquidó en favor del citado ciudadano por concepto de retroactivo de pensión anticipada la suma de \$134.888.535.
4. Que el 29 de septiembre de 2009, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACION PAR dando cumplimiento al fallo de tutela referido depositó a órdenes del Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba la suma de \$8.252.883.637, suma que equivale al monto que fue aprobado por dicho Despacho.

5. Que la cuenta de ahorro tradicional No. 4-1379-000720-7 del Banco Agrario de Colombia a nombre del demandado da cuenta de un depósito ahorros en efectivo de fecha 29 de septiembre de 2009 en la oficina de San Antero por valor de \$67.444.267.

6. Que el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACION PAR pagó en favor del señor Gustavo de Jesús García Rendón, por concepto de mesadas pensionales los siguientes valores:

- La suma de \$1.897.255, por mesada pensional de noviembre de 2009.
- La suma de \$3.982.110, por mesada pensional de diciembre y adicional de 2009.
- La suma de \$1.935.352.10 por mesada pensional de enero de 2010.
- La suma de \$1.935.352 por mesada pensional de febrero de 2010.
- La suma de \$1.935.352 por mesada pensional de marzo de 2010.
- La suma de \$1.935.352 por mesada pensional de abril de 2010.
- La suma de \$1.935.352 por mesada pensional de mayo de 2010.

7. Que la Sala Plena de la Corte Constitucional por medio de la sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, resolvió:

*“...**Cuarto:** En el expediente T-2471345, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, el dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en lo que respecta a los señores Luis Enrique*

Madera Salgado, Rubén Darío Álvarez Aguilar, Edinson Rafael Cortés Pérez, Dulfary Elena Echavarría Parra, Julio César Flórez Villamizar, Gustavo de Jesús García Rendón, José Helí Jaimes Delgado, Diego Mauricio Londoño Montoya, Ángel María Mora Lastra, Elkin Paniagua Agudelo, Rafael Patiño Usquiano, Luz Eugenia Quintero Tello, Álvaro del Carmen Rodríguez Guerrero, Luis Eduardo Santos Escobar, Juan María Verdecia Sarmiento y Óscar Alberto Yepes Torres. Asimismo, NEGAR la tutela de los derechos invocados por los señores Assad Gutiérrez Posedente, Tulio Enrique Galindo Bozón, Vidal Mauricio López Duque, Jairo Libardo Sotelo Domínguez y María Sussan Pérez Quintero. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia...”.

El juzgador de primera instancia para motivar su decisión precisó que la suma cancelada por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACION PAR en favor del demandado con ocasión de la orden de tutela, carece de causa porque la Corte Constitucional revocó la misma a través de la sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, por lo que no existe causa legal para que dicho valor haga parte del patrimonio del citado, y por tanto se configuró un enriquecimiento sin justa causa. Además, señaló que el término de prescripción debe contabilizarse desde la emisión de la sentencia de unificación, por ende, la presentación de la demandada suspende su conteo, siendo así, en este juicio no operó el fenómeno prescriptivo.

La Sala comparte la decisión de primera instancia por las siguientes razones.

Primeramente. En lo que respecta a la prescripción, conforme a lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones

que emanan de las leyes sociales prescriben en tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se hace exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador sobre el derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

El artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el mismo texto alusivo a la interrupción de la prescripción.

Según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que esta Sala de Decisión comparte, el análisis consonante de los preceptos lleva a concluir que únicamente es posible interrumpir la prescripción una vez (Sentencia de 21 de febrero de 2012, Radicado 41.908 y SL 374 de 12 febrero de 2020, Radicado 67.868).

Estando probado que la sentencia de unificación SU-377 se profirió por la Sala Plena de la Corte Constitucional el 12 de junio de 2014, y que la demanda se presentó el 22 de noviembre de 2016, esto es, dentro del término de 3 años previsto por ley para el efecto, quiere decir lo anterior, que en este juicio no operó el fenómeno prescriptivo como lo precisó el A quo.

Luego, ha de precisarse que en la referida sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en relación con los requisitos que los extrabajadores de la extinta TELECOM debían cumplir para ser beneficiarios del plan de pensión anticipada y la forma en que las pensiones anticipadas debían liquidarse, concluyendo que los accionantes no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de la pensión anticipada.

La Corporación mencionada en el Auto 503 de 22 de octubre de 2015, ante solicitud de aclaración y adición de la sentencia de unificación aludida, indicó que si bien no dispuso la restitución de las sumas entregadas en virtud a las órdenes impartidas en los fallos objeto de revisión; lo cierto es que las entidades encargadas de la administración del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM estaban facultadas para reclamar la restitución de esos dineros haciendo uso de los instrumentos legales para ello, dando aplicación a la teoría del enriquecimiento sin justa causa; y sostuvo:

“...5.5.4. El hecho de que el PAR hubiere cancelado sumas de dinero a favor de algunos petitionarios en cumplimiento de las sentencias de instancia, a pesar de que las mismas eran objeto de revisión por la Corte, no impacta la resolución a los problemas jurídicos que se plantearon, ni tampoco significa que se omitió resolver algunos de los extremos de la litis. La Sala Plena no dispuso la restitución de dineros a favor del PAR de TELECOM, porque dicha entidad puede hacer uso de los instrumentos legales que tiene a su disposición para lograr la devolución de lo pagado con fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa, en tanto la fuente de la obligación desapareció. Bastaba con revocar todas las órdenes de las sentencias de instancia para entender que los pagos efectuados en virtud de las mismas carecen de justificación legal y constitucional, por lo que la restitución de las cosas al estado inicial debe procurarse mediante los mecanismos dispuestos en el ordenamiento jurídico para ello. ...”

Por su parte, la sentencia T-214 de 1º de junio del año 2018, se profirió como resultado de la acción constitucional que el PAR TELECOM presentó contra el Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla, con ocasión del fallo absolutorio que emitió el 25 de abril de 2017 en el proceso ordinario laboral de única instancia que dicho ente promovió contra César Olmedo Triana Quiroz, y en el que pretendió

obtener la devolución de los dineros que le pagó en cumplimiento de un fallo de tutela que, posteriormente, fue objeto de revocatoria en la pluricitada sentencia SU-377 de 2014.

Para denegar la protección constitucional, el máximo órgano de cierre de tal jurisdicción consideró que, en ese preciso asunto, la decisión del juez natural de no ordenar el reembolso de las sumas pretendidas era razonable conforme a los principios de buena fe y confianza legítima, en la medida que en el juicio ordinario el demandante PAR TELECOM no demostró la existencia de un enriquecimiento sin causa del demandado.

El Alto Tribunal, indicó que es claro que la Corte Constitucional en ninguna de las decisiones, sentencia SU- 377 de 2014 y Auto 503 de 2015 adoptadas en relación con la revocatoria de los fallos de tutela que, en su momento, le reconocieron un derecho pensional a los accionantes, dispuso la devolución o reintegro, en favor del PAR, de las sumas que fueron pagadas por el mismo para tales efectos. Precizando en el comentado Auto que le correspondía al PAR, *procurar*, mediante los mecanismos dispuestos en el ordenamiento jurídico, la devolución de lo pagado con fundamento en el *principio del enriquecimiento sin causa*, para una vez verificada la existencia del mismo, se retrotrajeran, en toda su dimensión, los efectos que produjeron las decisiones judiciales revocadas.

Sostuvo la Corporación que en virtud de lo resuelto en la sentencia SU-377 de 2014, no le es imperativo al operador jurídico ordenar el reembolso de las sumas cancelados por el PAR. En ese sentido, el juez de la causa no se encuentra limitado en su autonomía para tomar la decisión de fondo que considere, correspondiéndole

al PAR demostrar la existencia de un enriquecimiento sin causa para obtener el reconocimiento judicial de la pretensión económica reclamada.

En ilación a ello, refiriéndose al precedente judicial señaló la providencia que el mismo no siempre constituye una barrera inquebrantable, pues en razón del principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse del mismo, siempre y cuando presente (i) de forma explícita las razones por las cuales se separa de aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales. De allí que las autoridades judiciales en el proceso de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico estén llamadas a procurar el respeto al derecho fundamental a la igualdad y a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe dado, que el desconocimiento del precedente se configura cuando el funcionario judicial se aparta injustificadamente de las decisiones proferidas por los tribunales de cierre o de aquellas que han sido emitidas por ellos mismos al momento de resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a la que ya había sido resuelta en aquellas providencias. Todo esto sin que medie razón jurídica alguna bajo la cual, se justifique el cambio de jurisprudencia.

Además, frente al principio del enriquecimiento sin causa como elemento definitorio para que el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM pueda acceder a la devolución de lo pagado de acuerdo con lo dispuesto por la Corporación en la Sentencia SU-377 de 2014, explicó que la figura del enriquecimiento sin causa se constituye como un principio general de derecho, a partir del cual se prohíbe incrementar el patrimonio sin razón justificada y que *“son tres los requisitos que deben probarse para que se declare la existencia de un enriquecimiento de esta índole y se ordene la devolución de los bienes correspondientes: 1) un enriquecimiento o*

aumento de un patrimonio; 2) un empobrecimiento correlativo de otro, y 3) que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico”; señalando lo siguiente:

“...7. El principio del enriquecimiento sin causa como elemento definitorio para que el PAR pueda acceder a la devolución de lo pagado de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional.

Una vez expuesto el contexto en el que tuvo lugar la revocatoria del derecho pensional que los jueces de tutela le habían reconocido al señor César Olmedo Triana Quiroz, y tomando en consideración las órdenes proferidas por esta Corporación en relación con tal decisión, la Sala encuentra necesario referirse a la figura enriquecimiento sin causa como condicionamiento expreso de la Corte Constitucional para que el PAR, en uso de los instrumentos legales, solicitara la devolución de lo pagado.

Empieza la Sala por advertir que la figura del enriquecimiento sin causa se constituye como un principio general de derecho, a partir del cual se prohíbe incrementar el patrimonio sin razón justificada. Al respecto, la doctrina se ha referido al mismo como el “aumento de un patrimonio con empobrecimiento del ajeno y sin amparo en las normas legales ni en los convenios o actos privados”.

(...)

Por su parte, esta Corporación remitiéndose a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que “son tres los requisitos que deben probarse para que se declare la existencia de un enriquecimiento de esta índole y se ordene la devolución de los bienes correspondientes: 1) un enriquecimiento o aumento de un patrimonio; 2) un empobrecimiento correlativo de otro, y 3) que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico”.

Así las cosas, y para efectos de lo que le interesa a la Sala es claro que uno de los requisitos sugeridos para la configuración de la institución del enriquecimiento sin causa guarda relación con la inexistencia de un título jurídico que debe hacerse extensivo al campo de las decisiones jurisdiccionales, habida cuenta del carácter legal y vinculante de las mismas. ...”.

Es precisamente lo que ocurre en este caso, en la medida que se evidencia que con la decisión proferida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014 devino en inexistente la obligación pagada en favor del demandado en la suma de \$150.444.660, pues contrario a lo manifestado por el apoderado del mencionado en el recurso de alzada, dicho valor se encuentra acreditado con: i) la liquidación individual presentada por la apoderada del señor Gustavo de Jesús García Rendón dentro de la acción de tutela y que fue aprobada por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba para efectos de la entrega del dinero embargado, donde se calculó un total de \$8.252.883.637, monto respecto del cual se liquidó en favor del citado ciudadano por concepto de retroactivo de pensión anticipada la suma de \$134.888.535; ii) la constancia del título judicial consignado el 29 de septiembre de 2009 a órdenes del Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba por valor de \$8.252.883.637; y iii) las constancias de pago de mesadas pensionales entre noviembre de 2009 y mayo de 2010, por valor de \$15.556.125, sumas que totalizan un total \$150.444.660, configurándose así un pago de lo no debido, especie de enriquecimiento sin causa, ya que lógicamente esa suma de dinero acrecentó el patrimonio del demandado, correlativamente, disminuyó el patrimonio de la empresa oficial empleadora que en su momento cumplió con la orden judicial, sin asidero jurídico o justo título, además que, dada la naturaleza del asunto por la revocatoria del fallo de tutela aludido, el ente demandante no cuenta con otra acción para lograr el reembolso o devolución del dinero que afirma se niega a restituir el accionado.

Ahora, respecto a la buena fe conforme el artículo 83 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, es claro que este principio exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta. Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.

La Corte Constitucional en la sentencia C-1194 de 2008 sostuvo que, si bien este principio se presume, es una presunción legal y admite prueba en contrario, “...*la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario...*”.

Se advierte que el presente asunto difiere de aquellos en que, al resolver la Sala de Casación Laboral algunas acciones o recursos extraordinarios de revisión ha sostenido, con fundamento en el referido principio de la buena fe, que no es del caso ordenar el reembolso de los valores sufragados con ocasión a reconocimientos pensionales efectuados por las entidades pagadoras a motu proprio o por orden judicial, aun cuando su causa luego desapareció; por cuanto es distinta la situación acaecida en el sub examine, en el que las sumas sufragadas por el PAR TELECOM al señor Gustavo de Jesús García Rendón se efectuaron de manera forzosa por orden de un juez de tutela y por efectos del cumplimiento inmediato que tiene esta clase de pronunciamiento, las que se mantuvieron latentes hasta que dicho trámite

culminó con la revisión efectuada por la Corte Constitucional que la revocó, sin que esa orden de pago en momento alguno hubiera cobrado alguna firmeza, tanto es así que tal determinación ordenada por los jueces de amparo se dejó sin efectos por el Tribunal Constitucional.

Al respecto, la Corporación mencionada en la sentencia SL-1893 de 2020 reiterada en la sentencia SL-305 de 2022, en un caso análogo se puntualizó lo siguiente:

“...No sobra advertir que la presente situación difiere ostensiblemente de otras en las cuales las sumas recibidas, derivadas de prestaciones periódicas que posteriormente se revisan por esta Corporación o por el Consejo de Estado por irregularidades en su generación o por su respaldo legal, la Corte las ha guarecido sobre el concepto de buena fe, pues en tales oportunidades son el resultado del reconocimiento de las entidades pagadoras motu proprio o por orden judicial, con efectos de cosa juzgada relativa, situación que en modo alguno ocurre en casos como el presente, dado que las sumas pagadas a la actora lo fueron de manera forzosa por orden del juez constitucional y por efectos del cumplimiento inmediato que se debe a esta clase de sentencias, y se mantuvieron sub judices o latentes hasta que dicho trámite procedimental terminó con la revisión efectuada por la Corte Constitucional, que concluyó en que los actos que les dieron origen, es decir, las órdenes judiciales ya enunciadas, “carecen de toda eficacia y validez jurídica en el orden constitucional vigente”, de manera que, en ningún momento cobraron alguna firmeza como para que se pueda decir que escaparon a la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la revisión de los fallos del amparo promovido...”.

Siendo así, no comparte la Sala la tesis del recurrente en tanto el principio de la buena fe no llega al extremo de garantizar que quien reciba un pago, sin que exista un móvil o una causa que lo justifique, imperiosamente deba ser eximido de su reembolso, pues las actuaciones constitucionales que le dieron origen perdieron

toda eficacia jurídica ante la revocatoria de que fueron objeto por la Corte Constitucional, máxime que se encuentra acreditado que la cancelación por parte de la ex empleadora de la accionada no se llevó a cabo a motu proprio, sino que lo fue de manera forzosa en razón a la premura que prevé la ley para dar cumplimiento a las decisiones constitucionales que en su momento fueron adoptadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba.

De otro lado, la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-305 de 19 de enero de 2022, radicado 84972 referida a un caso de contornos semejantes al que hoy ocupa la atención de esta Corporación, destaca que en materia laboral no existe norma expresa que regule la actio in rem verso por lo que, conforme el artículo 230 de la Constitución Política, los artículos 8.º de la Ley 153 de 1887 y 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y Seguridad Social y la sentencia C 083-1995, en los casos en que no exista norma exactamente aplicable a un asunto determinado, el juez debe optar por la aplicación analógica de la ley.

De lo expuesto, considera la Sala que no se contrarían los derechos adquiridos, al debido proceso y acceso a la administración de justicia, ni los postulados de confianza legítima y de la buena fe como lo asevera el representante judicial del accionado en su apelación, pues se itera que en la sentencia T-214 de 1º de junio del año 2018, la Corte Constitucional precisó que en la sentencia SU-377 de 2014 no se dispuso la restitución de dineros a favor del PAR de TELECOM, quedando a salvo el derecho de la entidad de hacer uso de los instrumentos legales que tiene a su disposición para lograr la devolución de lo pagado con fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa, en tanto la fuente de la obligación desapareció. Así, la presente acción era procedente adelantarla ante los jueces del

trabajo a través del proceso ordinario laboral, donde el juzgador, como ocurre en este juicio, acorde con el principio de la autonomía judicial para tomar la decisión de fondo, encuentra por demostrada la materialización del enriquecimiento sin causa del beneficiado con el pago; y en razón a que la fuente que originó la acción de tutela que inicialmente le fue concedida al señor Gustavo de Jesús García Rendón y luego revocada por la Corte Constitucional, fue el contrato de laboral que unió al demandando con la extinta TELECOM.

Ha de tenerse en cuenta además que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-3458 de 16 de septiembre de 2020, radicado 81404 se pronunció frente a uno de esos casos de ex trabajadores de TELECOM, cuya pensión anticipada reconocida por sentencia de tutela fue revocada por la Corte Constitucional en la plurimencionada SU-377 de 2014, donde sostuvo:

“... si bien, inicialmente las pretensiones del tutelante salieron adelante, también es cierto que, como lo relató el juzgador plural la Corte Constitucional como autoridad de cierre, en sede de revisión profirió fallo de unificación – sentencia CC SU- 377-2014-, que dispuso revocar el amparo inicialmente concedido, por ende, como lo explicó esta misma Sala en situación similar a la analizada, «ante la desaparición de la base jurídica del pago, es decir del fallo de amparo, surge para el beneficiario la obligación de reembolsar los valores recibidos»(CSJ SL1432-2020).

Aunque la disertación que propone el censor es más jurídica que fáctica, para abundar en razones debe mencionarse que no puede fincar un supuesto justo título para no devolver el dinero recibido, en dos sentencias que no tenían carácter definitivo toda vez que, de conformidad con el procedimiento de la acción subsidiaria y residual a la que acudió, existía la posibilidad de su revisión por la

Corte Constitucional y, que como ocurrió, fueron seleccionadas y revocadas por esa Corporación en su función de órgano de cierre.

Se dice lo anterior, por cuanto las decisiones proferidas dentro del proceso de amparo constitucional, tienen la virtualidad de constituir cosa juzgada solo cuando la Corte Constitucional «adquiere conocimiento de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria» (CC T-185-2013), por ende, aunque inicialmente pudo haber triunfado en sus pretensiones, la revocatoria de las providencias que condujeron al pago de los \$291.966.273, dejó sin ningún fundamento jurídico tanto el ingreso como la permanencia de ese dinero en su patrimonio...”.

Corolario de lo anterior, concluye esta superioridad que efectivamente no existe causa o título que justifique el pago de la suma de dinero objeto de litigio al señor Gustavo de Jesús García Rendón, por lo que su obligación es la de reembolsarla a la persona jurídica hoy a cargo de las contingencias del extinto TELECOM, según lo dispuesto en el artículo 2318 del Código Civil, que reza:

“...Artículo 2318. PAGO DE COSA FUNGIBLE NO DEBIDA. El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad”. 05088 31 05 001 2016 01034 01 8 No sobra advertir que la misma Corte Constitucional, en Auto 503 del 22 de octubre de 20151, precisó que las sumas de dinero reconocidas en cumplimiento de los fallos de tutela pueden restituirse a favor del PAR de TELECOM con fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa, “en tanto la fuente de la obligación desapareció”, careciendo de justificación constitucional y legal los pagos realizados a los ex trabajadores. En esa providencia se dijo, además, que “Bastaba con revocar todas las órdenes de las sentencias de instancia para entender que los pagos efectuados en virtud de las mismas carecen de justificación legal y constitucional, por lo que la restitución de las cosas al estado

inicial debe procurarse mediante los mecanismos dispuestos en el ordenamiento jurídico para ello...”.

Adicionalmente, la situación concreta del accionado, se encuentra efectivamente incluida dentro del profuso listado de trabajadores accionante cuyos fallos de tutela fueron revocados por la Corte Constitucional en la sentencia SU–377 de 2104, en la parte resolutive el numeral 4º, el cual se reprodujo en antecedentes.

Así las cosas, se debe confirmar la decisión que se revisa en apelación.

DE LAS COSTAS

Ante la desventura del recurso de apelación, las costas en ambas instancias corren en favor del CONSORCIO DE REMANENTES DE TELECOM, integrado por FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A., quien a su vez actúa como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACION y a cargo del señor Gustavo de Jesús Gracia Rendón.

Se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.160.000, para esta instancia.

Así las cosas, se confirmará la decisión que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 5 de febrero de 2019 por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Ante la desventura del recurso de apelación, las costas en ambas instancias corren en favor del CONSORCIO DE REMANENTES DE TELECOM, integrado por FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A., quien a su vez actúa como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN y a cargo del señor Gustavo de Jesús Gracia Rendón.

Se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.160.000, para esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **991ae2f23cc720895c18601092880e4d440f4838a1c1fac6fe1c11f7c4fe166d**

Documento generado en 14/11/2023 11:52:44 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>